

Imprimir

“El miedo a la democracia verdadera, el miedo al trastoque del orden político-económico existente y a las reivindicaciones de las mayorías campesinas, indígenas, afrodescendientes y demás sectores populares del país es una de las causas por las cuales la clase dominante que administra el Estado colombiano “lucha” contra los sectores excluidos”, de ésta manera nos interpela en el inicio de su tercer capítulo el informe semestral sobre situación de derechos humanos en Colombia, que va de enero a junio de 2017, titulado “Derechos Humanos en tiempos de Implementación de los Acuerdos de Paz”.

En un esfuerzo que merece todo nuestro reconocimiento, el Observatorio de Derechos Humanos Orinoco Magdalena (ODHOM), que es parte fundamental del Nodo de Saberes Populares Orinoco Magdalena, mediante la investigación, la formación y la generación de productos comunicacionales contribuyen a la comprensión y transformación de la Patria latinoamericana y en particular la grancolombiana, tal como lo tienen en sus lineamientos.

Por fortuna, hacen seguimiento juiciosa y sistemáticamente a la situación de los Derechos Humanos en Colombia, con lo que nos muestran todo cuanto se ha venido presentando en dicha materia, desde cuando se suscribieron los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), como también vienen observando cuanto acontece con el proceso de implementación de dichos Acuerdos, reconociendo que en la actualidad esas fuerzas insurgentes se constituyeron legalmente como partido político que se hace llamar las FARC, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común.

El ODHOM procura generar informes constantes en los que analizan, desde las perspectivas cuantitativas y cualitativas, los casos de violación de Derechos Humanos y las acciones de reivindicación de derechos colectivos en Colombia.

Pretende este Observatorio especializado en materia de derechos humanos, puntualmente, dentro de sus objetivos los siguientes:

Partiendo del monitoreo de fuentes públicas hacer un análisis sobre los derechos más

transgredidos y de las acciones de reivindicación de dichos derechos.

Buscan identificar cuáles son las regiones donde más se vulneran esos derechos, así como mostrar cuáles son los agentes activos de dichas transgresiones, e intentan encontrar la génesis de las mismas.

Analizando las políticas actuales de defensa y promoción de los Derechos Humanos en el país abren una perspectiva crítica sobre éstos derechos y se dan a la tarea de tomar atenta nota de las violaciones de derechos individuales y por supuesto, destacan también las violaciones de los derechos colectivos con tal de llevar un minucioso registro constante, periódico y actualizado, en el que queda claramente evidenciado el estado de las luchas del movimiento social y popular.

Nos dicen en dicho informe que, aun cuando habiéndose firmado los Acuerdos de Paz, en el Teatro Colón de Bogotá, por lo que algunos lo conocen y mencionan como los “Acuerdos del Colón”, que se rubricaron públicamente en ceremonia especial en noviembre de 2016, entre el Presidente de los colombianos y las extintas FARC-EP, hoy FARC partido político, la situación de Derechos Humanos en el país es muy poco lo que se ha transformado, e indican que dichas condiciones han retrocedido en cuanto que se ha incrementado la violencia política, de manera sistemática, en contra de las defensoras y los defensores de Derechos Humanos, campesinos y campesinas, líderes y lideresas sociales, comunidades afros e indígenas y excombatiente de las FARC-EP y sus familiares.

A pesar de las desafortunadas declaraciones públicas del Ministro de Defensa quien, en reiteradas ocasiones, ha dicho que: “los asesinatos de los líderes y lideresas y de los defensores y defensoras de los derechos humanos obedecen a ‘líos de faldas’”, ante las que éste y otros informes relacionados con tan álgido asunto de derechos humanos dejan muy mal parado al desinformado, por decir lo menos, funcionario de alto rango del gobierno central, lo que preocupa aún más a la opinión pública nacional e internacional al considerar el empeño puesto por el Presidente de la República para lograr la firma de los Acuerdos de paz sin que sus funcionarios del más alto rango se sintonicen con esos acuerdos.

Tanto así que, el exvicepresidente que estuvo durante todo el gobierno Santos, actualmente candidato a la Presidencia, recientemente retirado del gobierno para adelantar formalmente su campaña en contra, de manera pública, de lo logrado entre el gobierno nacional del que hacía parte activa, y las FARC, siempre se mostró en privado como contradictor de dichos acuerdos.

Este Observatorio de Derechos Humanos Orinoco Magdalena (ODHOM) nos pone a reflexionar sobre varios aspectos neurálgicos:

Acerca del paramilitarismo, nos dicen que éste fenómeno ha acompañado históricamente el conflicto social y armado y que, a pesar de la supuesta desmovilización en el año 2006, no ha desaparecido. Tanto así que nos presentan éstas inquietantes cifras: solamente en lo transcurrido del 2017 el paramilitarismo ha estado asociado a un 31% de la vulneración de 867 casos de agresiones a los Derechos Humanos individuales reportados.

Además, ratifican que las estructuras paramilitares o grupos herederos del paramilitarismo (como se le denomina en los Acuerdos de Paz) continúan cual poseedores de “patentes de corzo” regadas por todo el país, delinquiendo a sus anchas, por cuanto el gobierno asume la posición del avestruz intentando desconocer tan aberrante fenómeno, encabezado fundamentalmente por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo.

Sobre la profundización del Estado neoliberal, destaca éste informe tan completo que nos ocupa, el que con posterioridad a la firma de los Acuerdos de Paz, los movimientos sociales, la comunidades campesinas, afro e indígenas han tenido que hacer frente a las transnacionales y a las políticas de Estado que perpetúan cada vez más un sistema de vida que vulnera los derechos políticos, sociales y humanos de la colectividad a costa de la pobreza, la desigualdad social y el deterioro del ambiente para implantar un sistema económico que beneficia a pocos y perjudica a muchos.

En cuanto a la agudización de la estigmatización y criminalización política contra el

movimiento popular colombiano, destaca el ODHOM que, en la medida en que el fenómeno paramilitar avanza y la agudización del Estado neoliberal se hace presente en la cotidianidad de los oprimidos, el pueblo colombiano se ha visto en la necesidad de organizarse y salir a las calles a reclamar un Estado justo de derecho en el que prevalezca la vida humana así como también honre los Acuerdos de Paz firmados a finales de noviembre del 2017, los cuales plantean el principio del fin de la guerra en Colombia.

Una verdad incuestionable nos presenta, en cuanto precisa que el Estado ha recrudecido la estigmatización y la criminalización política para desmovilizar, desmoralizar y empañar la construcción de la paz.

Aun así, y en contra de cuanto el Estado colombiano adelanta para “hacer trizas los acuerdos” como bien lo dijo uno de los exponentes de las fuerzas contrarias a la paz, el movimiento popular se ha ido fortaleciendo, logrando mayor organización y articulación con tal de superar cuantos obstáculos le ponen a la paz quienes, de manera inexplicable para la óptica internacional, e irracional e irresponsablemente votaron por el No a la Paz en el plebiscito de octubre de 2017.

Con informes tan juiciosos, responsables y certeros como el del Observatorio de Derechos Humanos Orinoco Magdalena (ODHOM), como parte fundamental del Nodo de Saberes Populares Orinoco Magdalena, titulado “Derechos Humanos en tiempos de Implementación de los Acuerdos de Paz”, de obligada consulta para académicos, estudiosos de los fenómenos sociales y de conflicto armado interno colombiano, sectores sociales y público en general, nos percatamos de la sinuosidad del sendero que se presenta en contra de los avances logrados en la búsqueda de la paz.

Lo que nos queda bien claro es que el pueblo colombiano sí quiere la paz. Las élites andan en sus aparentes alturas, de espaldas al sentir y el querer popular.

FABIO MONROY MARTÍNEZ: Abogado, periodista. Coordinador en Colombia del Servicio Paz y Justicia en América Latina, SERPAJ-AL.